

Bogotá, 12 Octubre 2021

Señor (a)
Ciudadano (a)
Ciudad

Radicación: Falta de competencia de la consulta No. P20211006009186

Estimado (a) Ciudadano (a);

La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente responde su petición del 6 de octubre de 2021. De conformidad con la competencia otorgada por el numeral 5 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011, la Agencia Nacional de Contratación Pública tiene competencia para atender consultas relativas a temas contractuales, pero solo para «absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general»¹. Esto significa que no podemos pronunciarnos sobre casos particulares o sobre preguntas que no contengan dudas sobre la aplicación de una norma general en materia de contratación pública.

Su solicitud tiene como propósito que Colombia Compra Eficiente le brinde asesoría, emitiendo un concepto jurídico en el que se establezca si, para los procesos de pliegos tipo de interventoría de vías, las entidades públicas pueden otorgar cero puntos si el formato de experiencia establecido se encuentra mal diligenciado.

Infortunadamente no podemos responder su solicitud, pues se refiere a unos asuntos particulares propios del ejercicio de la actividad contractual de las entidades públicas.

En efecto, si bien en la consulta se mencionan características de los documentos tipo aplicables a los procesos de contratación estatal, usted no está solicitando que se absuelvan dudas sobre la interpretación y aplicación de estos, ni de otras normas de

¹ «Artículo 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– ejercerá las siguientes funciones:

»[...]

»5. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública».

»Artículo 11. Subdirección de Gestión Contractual. Son funciones de la Subdirección de Gestión Contractual las siguientes:

»[...]

»8. Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general».



carácter general en materia de compras y contratación pública. En realidad, procura una asesoría particular relacionada con la acreditación de la experiencia por parte de los proponentes, en atención a los requisitos establecidos en los pliegos tipo aplicables a los procesos de contratación estatal, de acuerdo con los hechos expuestos en la petición de consulta. El pronunciamiento por parte de esta entidad sobre sus preguntas desborda nuestra competencia consultiva, la cual está limitada a resolver problemas de aplicación de normas de carácter general. Revisada la consulta, se desprende que esta se refiere a la solución de unas inquietudes particulares respecto de las cuales no le asiste competencia a esta Agencia para pronunciarse.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia de Colombia Compra Eficiente, tal como se desprende de la lectura del Decreto Ley 4170 de 2011, se fija con límites claros, con el objeto de evitar que actúe como una instancia de validación de las actuaciones y/o decisiones de las autoridades o de los demás participantes del sistema de contratación pública, en desarrollo de la actividad contractual. La competencia consultiva se circunscribe a la interpretación de normas de «forma general» y, por definición, no puede extenderse a la resolución de controversias, ni a brindar asesorías sobre casos puntuales.

La Agencia Nacional de Contratación Pública no cuenta con funciones de asesoría particular. Por ello, no puede determinar las decisiones que pueden y/o deben adoptar las entidades públicas en desarrollo de sus procesos de contratación, lo cual implica que no puede validar cuál es la forma de aplicar los documentos tipo a casos particulares y concretos. Pronunciarse sobre la pregunta objeto de la solicitud, implicaría realizar un juicio de valor que condicionaría las decisiones que deben adoptar o las actuaciones que deben adelantar las autoridades en el desarrollo de los procesos de contratación estatal a su cargo.

Es bueno señalar que, las autoridades fueron dotadas de autonomía administrativa para el ejercicio de las funciones y competencias que en virtud del principio de legalidad les fueron atribuidas por el ordenamiento jurídico. Por esa razón, como responsables de su actividad contractual y conforme al régimen jurídico de contratación que les resulta aplicable, así como en atención a las exigencias contenidas en los documentos tipo, les corresponde adoptar las decisiones y adelantar las actuaciones que estimen pertinentes para desarrollar dicha actividad.

Por consiguiente, en este caso, de manera autónoma e independiente, con la asesoría de sus equipos jurídicos, les corresponde estructurar sus procesos de selección, verificando, entre otras, las causales de rechazo de las ofertas. Lo anterior, previo análisis de las propuestas que presenten los oferentes y, claro está, acatando las disposiciones que rigen esos aspectos contractuales y sin perjuicio del principio de «inalterabilidad» de esos documentos tipo.

Vale la pena mencionar que, puede tenerse en cuenta la normativa señalada en el parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, frente a la posibilidad de subsanar



documentos o requisitos que hacen parte de la futura contratación o referentes al futuro proponente, pero en todo caso es responsabilidad de la entidad definir la normativa y el procedimiento aplicable al caso particular.

Esta entidad no puede involucrarse, directa o indirectamente, en las decisiones o actuaciones de las entidades estatales en materia de contratación estatal, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, particularmente lo estipulado en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 80 de 1993. En virtud de esas disposiciones, se les concedió a las entidades públicas la capacidad jurídica para llevar a cabo su contratación, lo cual se traduce en que gozan de plena autonomía e independencia para adoptar las decisiones o realizar las actuaciones que estimen pertinentes en desarrollo de la actividad contractual.

Debe destacarse que la competencia consultiva de esta entidad fue acotada de manera precisa por el numeral 5 del artículo 3 y el numeral 8 del artículo 11 del Decreto 4170 de 2011 y debe ser ejercida en los términos consagrados en esas disposiciones. En efecto, admitir que se puedan plantear dudas de todo tipo, implicaría actuar por fuera de la competencia asignada por el legislador, y se desnaturalizaría el objetivo institucional de servir de «guía a los administradores públicos en la gestión y ejecución de recursos, que permita que su quehacer institucional pueda ser medido, monitoreado y evaluado y genere mayor transparencia en las compras y la contratación pública».

De otro lado, el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 señala que, si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará al interesado dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción, si obró por escrito, y remitirá la petición al competente con copia del oficio remitario al peticionario. En aquellos eventos que no exista funcionario competente así se le comunicará al solicitante. Por ello, teniendo en cuenta que en el país no existe alguna autoridad que tenga el deber de resolver su caso, le comunicamos que no es posible remitir la petición a otra institución.

Atentamente,

Juan David Marín López
Subdirector Gestión Contractual ANCP – CCE (E)

Elaboró: Manuela Mantilla Pacheco
Contratista de la Subdirección de Gestión Contractual
Revisó: Ximena Ríos López
Gestor T1 – 11 de la Subdirección de Gestión Contractual
Aprobó: Ximena Ríos López
Gestor T1 – 11 de la Subdirección de Gestión Contractual

